



MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CRISIS POLÍTICA Y PAZ URBANA



CRISIS POLÍTICA Y PAZ URBANA

La crisis actual del gobierno es innegable y su origen incuestionable pero profundo, se encuentra en un elemento crucial de la política nacional relacionado con la pugna entre la democratización real de Colombia frente a la tradición antidemocrática que ha gobernado desde hace décadas, es decir: la guerra frente a la paz; la transformación productiva del país hacia la modernidad o seguir con la economía monopolista, extractivista y del narcotráfico que ha imperado en los últimos años de nuestra historia; una cultura que promueva valores de solidaridad, colectivismo y sentido nacional frente al individualismo sistémico que promueve la filosofía neoliberal.

El gobierno necesariamente tenía que pactar con sectores tradicionales para acceder al triunfo electoral, más no podía olvidar la estirpe de ese triunfo que se encuentra en la movilización popular que expresa los reclamos de ciudadanía y la necesidad honda de la democratización de la nación. Sin embargo, la orientación fundamental del gobierno ha sido la de pactar con los sectores tradicionales de la política a los que no les interesa ninguna transformación real y mucho menos la vida de las comunidades o de la gente sencilla.

En otras palabras: no puede esperarse otra cosa de pactar con Armando Benedetti, con Santos y sus intermediarios, con Dyllian Francisca Toro, o la lista larga de personajes a los que sólo les preocupa el popular CVY o “como voy yo”, qué puestos obtienen, cómo se ubican en el aparato de poder. Estos políticos profesionales necesariamente salen a cobrar sus cuotas y ponen en aprietos la posibilidad de cambios democráticos.

De otra parte, la crisis de ideas del conjunto de la sociedad colombiana también se manifiesta en la Colombia Humana y el Pacto Histórico, como colectividades que reivindican el cambio, pues hay déficit de cuadros políticos que puedan imponerse en el debate legislativo y con capacidad de vincularse con las comunidades que llevan muchos años de lucha y trabajo, pero que no tienen los contactos ni el vínculo burocrático con los “rockstar del cambio”. Se llama desde el gobierno a la movilización, pero muchas comunidades organizadas estrellan sus aspiraciones con los portazos de funcionarios inoperantes o con la falta de respuestas claras por parte del gobierno a sus propuestas de tipo productivo u organizativo. La “democracia” representativa tradicional no alcanza para las reformas propuestas por el gobierno y la posibilidad de convertir esas reformas en cambios revolucionarios, que se encuentra en el empoderamiento democrático de las comunidades, se frustra cuando se privilegian acuerdos con élites regionales en lugar de poner en primer término a las comunidades en las definiciones del PND, por ejemplo.

Además, la crisis tiene otra arista en el plan de paz del gobierno, que se mueve entre los criterios tradicionales de negociación privilegiando a los que más fuerza demuestran y las visiones que impiden entender de conjunto los diálogos y negociaciones con diferentes actores en la búsqueda de una paz democrática para Colombia. Esas visiones incluyen cierta improvisación, la diletancia entre demostrar fuerza por parte del Estado (para supuestamente mantener tranquila a la derecha) y las dificultades propias de un conflicto que tiende cada vez más a desordenarse y a urbanizarse. Por ejemplo, la violencia urbana es producto de la marginalidad y la exclusión por lo tanto no puede tratarse como un problema de unos desadaptados de un lado y las comunidades del otro.



Sumado a todo esto se encuentra el ambiente de opinión generado por medios de comunicación corporativos que aportan a la confusión entre amplios sectores de la población principalmente urbana, mientras ambientan el golpe por “lawfare” y aprovechan todas las fisuras del gobierno derivadas de sus dificultades pero también de la existencia de una institucionalidad reaccionaria y mafiosa que maneja mecanismos concretos del poder, por ejemplo la Procuraduría y la Fiscalía.

También la paz urbana es democracia

Aunque la mirada mediática fija su atención, a menudo, con mayor interés en el desarrollo del conflicto armado en las zonas rurales y lo que allí ocurre es objeto de permanente debate político, herramienta de oposición o factor de apalancamiento de agendas políticas; también las ciudades –grandes, intermedias o pequeñas– son merecedoras de atención particular cuando se habla de la búsqueda de la paz o de la guerra. Por un lado, estudios publicados por centros de pensamiento¹ demuestran el aporte de las ciudades a los índices de violencia nacional, por otro en ellas se concentra la política, luego, condensan la conflictividad nacional, contradicciones y tensiones entre sectores políticos. Tal vez por esta razón el denominado plan gubernamental de la Paz Total puso a andar una “estrategia” urbana no se sabe si complementaria, subsidiaria o residual de los acuerdos con actores armados rurales. Dicha estrategia fundamentalmente se concentra en el sometimiento de estructuras urbanas grandes (bandas delincuenciales o herederos del paramilitarismo, oficinas etc) a cambio de beneficios jurídicos (aún en debate) dos ejemplos de esa visión del gobierno Petro tratan de aplicarse en las ciudades de Buenaventura y Medellín.² Con recientes reveses³, principalmente en Buenaventura, estos planes permiten entender la idea que el gobierno tiene del conflicto urbano y su propuesta de Paz Total en las ciudades.

Según estos dos planes de la paz urbana algunos rasgos generales del modelo de negociación planteado por el gobierno son:

A) identificación de estructuras armadas con un nivel de control territorial en comunas, barrios o localidades que ejercen una fuerte presión sobre la población, control de rentas tráfico de droga en diferentes niveles, extorsión a todo tipo de comercios, asesinatos selectivos a liderazgos populares, alianzas con actores legales–locales, regionales o nacionales, control de aparatos de organización comunitaria (juntas de acción comunal).

B) como hecho común a la presencia de estas estructuras su poder no es monopólico y por tal razón están en permanente disputa con otras estructuras, situación que desencadena muertes, desapariciones, casa de pique, tortura, amenazas. Etc.

C) Estas estructuras urbanas no tienen un reconocimiento político y por tal razón no son susceptibles de vincularse a una discusión sobre reformas sociales, ni del desarrollo de un proyecto de nación. Se abren espacios de diálogos con estas organizaciones, pero solo se está dispuesto a acordar los términos de su sometimiento.

1 La ciudad: diez tesis sobre su criminalidad y violencia. Carlos Mario Perea En: Violencias que persisten el escenario tras los acuerdos de paz. 2020.

2 <https://www.pares.com.co/post/estructuras-armadas-ilegales-de-medell%C3%ADn-suspenden-hostilidades-y-apoyan-la-construcci%C3%B3n-paz-total>
3 <https://www.pares.com.co/post/en-crisis-la-paz-urbana-en-buenaventura>



D) Al parecer el primer paso es reducir los niveles de violencia, principalmente de homicidios, el objetivo inicial es acordar treguas con estas grandes estructuras que aclimaten un ambiente de paz en las localidades para pasar a un progresivo desarme y sometimiento.

Los puntos mencionados, a nuestro juicio, sintetizan el modelo gubernamental de paz urbana, con la consecuencia de excluir fuerzas distintas, que sin apegarse a esa lógica y que, por el contrario, tienen carácter insurgente, también participan del conflicto urbano y hoy no son objeto de la mirada del gobierno.

Sin embargo, la Paz Urbana que se aplica o se intenta aplicar en las ciudades anteriormente mencionadas y que busca ser ubicada como referente, consideramos es un paso importante, es un aspecto que sin duda debe ser solucionado y acordado, pero corresponde solo a una cara de un problema con muchas variables y matices que también debe entenderse más allá del modelo tradicional de negociación, de lo contrario no solucionará de fondo nada.

La paz también es con el pueblo urbano

Ante todo es claro que este modelo de negociación intenta ganar legitimidad al tratar de suspender, así sea de manera temporal, la escalada de violencia que se vive en algunos centros urbanos. Sin embargo, la compleja realidad nacional y la tradición política colombiana marcan una dinámica que se muestra contraria a este interés y que indica la preferencia por parte de las organizaciones armadas a mostrar fuerza, entendida como actividad militar con el objetivo de hacerse visibles y posicionarse en un diálogo con el gobierno nacional, por esa circunstancia ante la urgencia de generar un ambiente de tranquilidad y de paz el gobierno asumió una estrategia que promueve todo lo contrario.⁴

Este primer hecho, fácilmente constatable, es un fuerte coletazo de este esquema de negociación, y mina la legitimidad del mismo. En otros términos, si hay demostraciones de poder, fuerza, capacidad de coerción etc, hay posibilidades de ser entendidos por el gobierno como actores necesarios para el dialogo, pero si esto ocurre se enrarece el ambiente, se aumenta el ruido y se hace eco de una inestabilidad poco favorable para tan loable objetivo de la paz.

Este hecho a nivel urbano, adquiere una mayor complejidad pues una escalada de acciones ofensivas en las ciudades lo que generaría es una mayor ingobernabilidad para un gobierno que poco a poco pierde capacidad de maniobra y se ahoga en sus propias contradicciones. Es así como las opciones desde quienes ejercemos la actividad política con algún tipo de respaldo militar requieren mayor tacto, así eso implique que el gobierno mire para los lados cuando extendemos la mano para buscar una solución a la crisis nacional. **En este aspecto desde el MRP hemos privilegiado sostener una posición que aunque despreciada por algunos tomadores de decisión dentro del gobierno, nos mantiene firmes en los espacios donde empujamos organización popular, aunque defendemos que no es cierto que el ejercicio de la violencia en defensa de proyectos políticos democráticos ponga en riesgo la organización popular, hoy esto enrarecería el ambiente para el gobierno, a la par en el horizonte político no vemos posible renunciar a esta posibilidad cuando los proyectos reaccionarios amenazan y ejercen constantemente el sabotaje y la violencia.**

⁴El mismo comisionado de paz Danilo Rueda lo planteó al conocerse los planes de expansión de la Segunda Marquetalia en el Sumapaz. <https://www.lafm.com.co/colombia/el-mensaje-del-comisionado-de-paz-a-la-segunda-marquetalia-demostraciones-de-fuerza-son>



La comprensión que tiene el gobierno choca con matices que elevan el reto de la consecución de la paz urbana. A excepción de Medellín, Pereira y recientemente Buenaventura (en algún momento Cali), ninguna ciudad de Colombia es objeto de un control ampliado de estructuras armadas que derive en un posible acuerdo según el actual modelo de negociación que el gobierno plantea⁵. En otras ciudades (en este punto es importante reconocer los esfuerzos de analistas e investigadores para entender la naturaleza de los modelos de aplicación de la violencia), han operado con base en estructuras pequeñas, atomizadas, diluidas y con intereses diferentes a los de ejercer control territorial compatibles con el modelo tradicionalmente conocido. En la práctica, hay estructuras que tienen diferentes niveles de incidencia política en las ciudades donde operan, algunas definen incluso políticas de seguridad, influyen en la elección de alcaldías o concejos, tienen fuertes vínculos con sectores políticos y militares regionales aunque su intención o motivación no sea política en el sentido de participación o reformas pactadas de impacto regional o local, mucho menos orientadas a la democratización de la vida nacional ni al empoderamiento político de las comunidades.

En otro nivel estas estructuras generan control social como ya se anotó, al tiempo que se lucran inmensamente extorsionando a las comunidades o desplazándolas para apoyar el lavado de activos en proyectos inmobiliarios, comerciales, turísticos, etc.

Pero como veníamos planteando si bien existe una “diversidad” de esquemas de control que se expresan con diferencia en ciudades como Cúcuta⁶, Barranquilla o Bogotá, estos modelos tienen rasgos fundamentales, uno de ellos es la esencia netamente contrainsurgente de cualquier modelo criminal urbano. Para cualquiera que se haya involucrado en la organización popular barrial, sea desde el más humilde y simple líder popular con la esperanza de promover el deporte juvenil como canal para la superación de la pobreza o la organización comunitaria que promueve un cambio social profundo, chocan con la fuerza que impone un orden donde lo único tolerable es el camino de la delincuencia común, el vicio, la prostitución, la mendicidad, y así signándose un futuro que aleja cada vez más a las masas ciudadanas de los caminos de la democracia.

En síntesis, la anomia social que se promueve con métodos diferentes se convierte en funcional a un orden que convierte las desgracias particulares de miles de jóvenes populares en amplias rentas ilícitas, mientras el poder sigue perpetuando su exclusión. Es decir, la relación entre las múltiples formas de control criminal y la extensión de la antidemocracia es profunda y práctica, entre más quebrado este el tejido social, más posibilidades tiene la violencia usada para mantener el status quo.

Insurgencias urbanas

Paralelo a este escenario urbano no todas las expresiones de organizaciones armadas tienen un criterio contrainsurgente, el paro nacional del 2021 es reconocido por todos como un hecho social que revalidó el poder de las ciudades en la disputa política nacional y demostró que las fuerzas insurgentes armadas y desarmadas tienen presencia en las ciudades, y estas fuerzas no pueden ser despreciadas porque no adoptan el modelo que el actual gobierno privilegia para la negociación urbana.

⁵ Para entender esto ver entre otros a Ciudades en la encrucijada: violencia y poder criminal en Río de Janeiro, Medellín, Bogotá y Ciudad Juárez y Fundación Ideas para la paz. (2013). Crimen organizado, intensidad y focalización de la violencia homicida en Bogotá. Una mirada de Largo Plazo

⁶ Por ejemplo extorsión <https://caracol.com.co/2023/04/21/mas-de-300-comerciantes-son-victimas-de-extorsion-en-cucuta/>



La posibilidad real de llevar a cabo un proceso de Paz Total tiene que ampliar el criterio y reconocer que no basta con el desarme de estructuras urbanas para decir que se consolida la Paz, este debe ser un aprendizaje de la paz de Santos con las FARC-EP que privilegió el desarme de los insurgentes, ignorando las necesidades de inclusión en un proyecto de nación democrático de esas regiones dio como resultado que a los pocos años el rearme fue incontenible. Hoy muchas organizaciones barriales, pequeñas o grandes, se debaten en como cambiar la dinámica violenta de sus territorios por espacios donde se puedan desarrollar sus proyectos de vida, hasta el día de hoy no es claro como en Medellín las organizaciones comunitarias, sociales y populares son tenidas en cuenta para la reconstrucción de un tejido social que garantice convivencia y pleno desarrollo de la vida de los pobladores subyugados por estas bandas que el gobierno pretende desarmar como solución al conflicto urbano. Recalcamos que es de la mano de las expresiones populares que es posible superar la marginalidad promovida por esa violencia contrainsurgente. En resumen, sin dejar de lado la situación de guerra en el campo, es en medio de esta crisis y en la disputa por la paz urbana que se juega la profundización del fascismo que quiere volver al gobierno, frente a la posibilidad de consolidar fuerzas del pueblo que impulsen, apoyen y participen en los cambios radicales por la democracia que necesita Colombia.

PAZ ES DEMOCRACIA PARA EL PUEBLO

Junio de 2023

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

M. R. P.

